

# GIPUZKOA

DELA

1994 IRAILAK 2, OSTIRALA

## Ordóñez acusa al jefe de la Guardia Municipal de cobrar del Festival de Cine hace tres años

El portavoz del PP le imputa «utilizar bienes públicos en interés particular»

I. Urrutia

DONOSTIA. El jefe de la Guardia Municipal, Mikel Gotzon Santamaría incurrió en irregularidades al cobrar al menos 1.800.000 pesetas del Festival de Cine en 1991 en concepto de labores de vigilancia y custodia, según denunció ayer Gregorio Ordóñez, portavoz del PP y alcalde en funciones.

El edil popular arremetió contra la gestión que está realizando el comisario de los municipales y mostró una carta enviada por el propio Santamaría al entonces director, Koldo Anasagasti. Ordóñez sospecha que el jefe de la Guardia Municipal, que disfruta de un plus por dedicación exclusiva, pudo cobrar en total seis millones de pesetas que habría repartido con un grupo reducido de guardias de su confianza, a los que Ordóñez agrupa bajo la denominación de «los pata negra».

Las acusaciones de Ordóñez, que exige al alcalde Odón Elorza la apertura de un expediente disciplinario a Santamaría, se basan en que «se utilizaron bienes públicos (pistolas y vehículos) para intereses particulares». Tanto Santamaría como los guardias que habrían cubierto el servicio para el Festival de Cine estaban de vacaciones o libres de servicio, «pero el procedimiento fue irregular porque utilizaron bienes públicos en su beneficio. Además se trata de una competencia desleal respecto a las empresas de guardas jurados».

En este punto asegura que lo correcto hubiera sido que el Festival de Cine hubiera solicitado al ayuntamiento la cobertura de seguridad, corriendo los gastos e ingresos a cuenta del municipio.

### Unidad de Seguridad Interna

En la carta remitida por Santamaría a Anasagasti que no está fechada, el jefe de la Guardia Municipal, comunica que «componentes de esta Guardia Municipal libres de servicio constituirán una Unidad de Seguridad Interna y cuyo presupuesto total, por todos los conceptos, ascenderá a 1.800.000 pesetas».

Esta cantidad cubriría los gastos derivados de los siguientes servicios: vigilancia de los accesos al teatro Victoria Eugenia; seguridad interior de espacios destinados a organización y público; guarda y custodia de las películas; seguridad y control del acto de clausura, y protección de personalidades del cine que la dirección del festival determinase.

Ordóñez solicitó hace unos meses al alcalde que se investigara si era cierto que agentes municipales y el responsable de la Guardia Municipal habían participado como guardas privados durante el festival, pero no recibió respuesta.



Mikel Gotzon Santamaría, responsable de la Guardia Municipal

(Foto Pemán)

Ahora acusa a Elorza de «ocultación de datos».

El portavoz del PP considera que estas actuaciones contribuyen a «desmotivar a los guardias municipales. Tengo el pleno convencimiento de que el comisario no está haciendo las cosas bien. Valora más la fidelidad que la profesio-

nalidad de los agentes».

En este sentido, asegura que ha recibido decenas de quejas de guardias municipales, «lo que pone de manifiesto que algo está pasando en la Guardia Municipal».

Por otra parte considera que el despliegue de la Ertzaintza no debe relegar a un segundo plano a

los guardias «que son el escalón más cercano a los ciudadanos. La Guardia Municipal, como policía integral, no está solo para poner multas, aunque a lo mejor esto sucede porque el jefe está más preocupado por sus negocios particulares que por el buen funcionamiento de la Guardia Municipal».

## Santamaría: «El servicio se prestó con la autorización del Ayuntamiento»

I. U.

DONOSTIA. Mikel Gotzon Santamaría asegura que el servicio prestado al Festival hace tres años, «era conocido por mis dos jefes, el alcalde Xabier Albistur y el delegado de Régimen Interior, Joaquín Villa, que nos dieron autorización. Lo que me preguntó es por qué Ordóñez saca ahora este tema. ¿Cuál es la razón, teniendo en cuenta que el PP tenía en el Festival un representante que conocía perfectamente que íbamos a trabajar?». El responsable de la Guardia Municipal, que asegura que Ordóñez tiene una «afijación» contra él, advierte que «todo lo que hicimos está por escrito. El informe a Anasagasti lo firmé como jefe de la Guardia porque fue el festival el que insistió en que hiciéramos nosotros el servicio, pues las empresas de seguridad no les merecían tanta confianza, la Policía Nacional no podía hacerlo y la Ertzaintza no estaba desplegada».

Recuerda que la situación en 1990 era muy tensa; se había producido el robo de una película, existían constantes amenazas de bomba, la campaña de boicot a productos franceses, etc. Santamaría señala que el coste del servicio fue de 1.800.000 pesetas por 1.082 horas de trabajo «de nueve de la mañana a una de la madrugada», incluyendo comidas, dietas y desplazamientos. «Cada uno de los agentes que trabajamos cobramos ciento y pico mil pesetas».

Niega que se utilizaran vehículos o uniformes y respecto al uso de pistolas, «cualquier agente puede llevarse la pistola a casa previa autorización».

Sobre la acusación de que no podía realizar tal trabajo por su dedicación exclusiva, puntualiza que «eso es muy discutible. Trabajo las mismas horas que cualquier otro guardia. Además se trataba de realizar unas funciones muy especiales, para una entidad sin ánimo de lucro. La dirección del festival quería que lo hicieran guardias municipales. Soy un profesional y dadas las circunstancias que concurrían entonces, accedimos. No lo hubiéramos hecho para una empresa privada, pero se trataba de un acontecimiento imbricado en la ciudad».

### «No me dejo manejar»

Respecto a las críticas sobre su gestión, Santamaría declara que «no es cierto que haya desmotivación en la Guardia. Tras el despliegue de la Ertzaintza, aunque a Ordóñez no le guste, hemos tenido que hacer una reestructuración, pero los datos avalan, por ejemplo, que en la última Semana Grande trabajamos tanto como hace un año».

En último término, cree que la denuncia no está justificada y atribuye la fijación contra su persona a que «no me dejo manejar. Soy un profesional que asume las responsabilidades que le competen, que es profesional, no política. Quiere manchar mi imagen y para ello recurre a cualquier jaimitad».

## La firma Kefrén hace una oferta para explotar la Piscina de Ondarreta

I. U.

DONOSTIA. La empresa de muebles Kefrén ha presentado en el ayuntamiento una oferta para la explotación de las instalaciones municipales de la Piscina de Ondarreta, donde propone la habilitación de una instalación deportiva-lúdica que incluiría gimnasio, minifrontones, instalación cardiovascular, máquinas, cintas, bicicletas, sala de halterofilia, restauración de la piscina y un bar-cafetería. La inversión ascendería a unos 200 millones de pesetas.

El ayuntamiento ha convocado un concurso público para la gestión y explotación de la Piscina durante los cuatro próximos años. La oferta de Kefrén, dada la inversión propuesta, no sería viable en tan reducido período de tiempo. Como quiera que sólo se ha presentado esta oferta, si cuando concluya el plazo -15 de septiembre- no se presentan otras el ayuntamiento podría optar por declarar desierto el concurso. En tal caso se realizaría una nueva convocatoria, por un período de explotación más largo, donde sí sería viable la oferta de Kefrén.

### 35 puestos de trabajo directos

La empresa señala en la memoria de la oferta presentada que desde un punto de vista estético «se trata de una gran inversión en tanto que el proyecto se basa en elementos ligeros, claros, ordenados y humanos».

Desde un punto de vista práctico, se subraya que la oferta «tratar de dotar, junto a mar, de un lugar de encuentro para los donostiarras amantes de los deportes». Por otra parte, también remarca que la aceptación de la oferta supondría la creación de «35 puestos de trabajo directos y bastantes más indirectos».

El proyecto de diseño presentado prevé la recuperación de la traza original del edificio existente y la recuperación de la piscina. El resto del complejo se construiría con estructuras y revestimientos totalmente desmontables y absolutamente utilizables como elementos cerrados y abiertos. Sólo la inversión en cubiertas portátiles alcanzaría un coste de 100 millones de pesetas.

La oferta de la empresa Kefrén es la única que se ha presentado por el momento en el registro del ayuntamiento, que mantiene cerrada la instalación de la Piscina desde que concluyó la concesión realizada a la familia Sabadell, que abrió una discoteca en el lugar.

El plazo para presentar ofertas concluye el próximo día 15 de septiembre, jueves, y un día después se procederá a la apertura de pliegos, según informó ayer el concejal delegado de Hacienda, Antxon Marquet.